CONSTANCIA SECRETARIAL: Vencidos los términos de traslado dispuestos en la lista fijada el 02 de febrero de 2023, las partes guardaron silencio.

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ
Secretario

Sin necesidad de firma Artículo 2, inciso 2 Decreto Presidencial 806 de 2020 y artículo 28 del Acuerdo PCSJA20-11567

Radicación No.: 66001-31-05-002-2019-00069-02
Proceso: Ordinario Laboral
Demandante: Clara Luz Benjumea Palacio
Demandado: Colpensiones y otros
Juzgado de origen: Tercero Laboral del Circuito de Pereira

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA PRIMERA DE DECISION LABORAL

Magistrada Ponente: **Ana Lucía Caicedo Calderón**

Pereira, Risaralda, diecisiete (17) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Acta No. 43 del 16 de marzo de 2023

Teniendo en cuenta que el artículo 15 del Decreto No. 806 del 4 de junio de 2020, expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, adoptado como legislación permanente por medio de la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, estableció que en la especialidad laboral se proferirán por escrito las providencias de segunda instancia en las que se surta el grado jurisdiccional de consulta o se resuelva el recurso de apelación de autos o sentencias, la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, integrada por las Magistradas ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN como Ponente, OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA y el Magistrado GERMÁN DARÍO GOEZ VINASCO, procede a proferir el siguiente auto escrito dentro del proceso ordinario laboral instaurado por **Clara Luz Benjumea Palacio** en contra de **Porvenir S.A., Protección S.A. y Colpensiones.**

PUNTO A TRATAR

Por medio de esta providencia procede la Sala a resolver el recurso de apelación promovido por el apoderado judicial de la demandante en contra del auto del 12 de agosto de 2022, por medio del cual se aprobó la liquidación de las costas realizada por la secretaría del juzgado de conocimiento. Para ello se tiene en cuenta lo siguiente:

1. Antecedentes Procesales

Para mejor proveer conviene indicar que en sentencia de primera instancia, proferida el 28 de octubre de 2021, se declaró la ineficacia del traslado de régimen que hizo la actora a Horizonte, hoy Porvenir S.A., el 26 de marzo de 1999, así como los traslados horizontales a Porvenir S.A. y a Santander, hoy Protección S.A. En consecuencia, se ordenó a Protección S.A. a restituir a Colpensiones la totalidad de los aportes efectuados, con sus respectivos rendimientos, así como los gastos de administración, comisiones, cuotas de garantía de pensión mínima y seguros previsionales, últimos que también le impuso devolver a Porvenir S.A.

Finalmente, se declaró que la actora tiene derecho al reconocimiento de la pensión de vejez por parte de Colpensiones, una vez se retire del servicio oficial y se condenó a Porvenir S.A. a cancelar las costas procesales a favor de la promotora de la litis en un 80%.

En sentencia de segunda instancia, proferida el 18 de abril de 2022, se modificó la decisión de primer grado en el sentido de ordenar a Colpensiones que estudiara el derecho pensional de la actora, atendiendo la ineficacia declarada en la litis, una vez aquella haga la respectiva solicitud, confirmándose en todo lo demás.

2. Auto objeto de apelación

Una vez allegado el expediente al juzgado de origen, mediante auto del 12 de agosto de 2022 se aprobó la liquidación de las costas efectuada por la secretaría del despacho de conocimiento en el siguiente sentido:

LIQUIDACION DE COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, PROCEDE A ELABORAR LA LIQUIDACIÓN DE COSTAS ORDENADA, DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO LABORAL DE CLARA LUZ BENJUMEA PALACIO Y EN CONTRA DE LA AFP. COLPENSIONES, AFP. PORVENIR S.A. Y AFP. PROTECCION S.A., ASÍ:

AGENCIAS EN DERECHO A CARGO DE LA DEMANDADA AFP. APF. PORVENIR S.A. EN UN 80% Y EN FAVOR DE LA PARTE DEMANDANTE CESAR CARDONA CASTRILLON, IMPUESTAS EN PRIMERA INSTANCIA, ASÍ:

A CARGO DE AFP. PORVENIR S.A. 80%	\$2.800.000,00
SUB TOTAL	\$2.800.000,00

VALOR TOTAL	\$2.800.000,00
-------------	----------------

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE. (\$2.800.000,00)

En contra de dicha providencia la demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, siendo confirmada por auto del 13 de octubre de 2022, bajo

el argumento de que se tasaron las agencias en 3.5 SMLMV, al tratarse de una obligación de hacer, respetando los límites del art. 5 Acuerdo PSAA 16 – 10554 de 2016, sin que hubiese lugar a fijar los montos máximos dadas las características de la actuación.

3. Recurso de apelación

El apoderado de la parte actora sustentó el recurso de alzada arguyendo que de conformidad con el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016, las agencias en derecho debieron fijarse en 10 salarios mínimos, por lo que las costas procesales en un 80% ascienden a \$8.000.000, debiéndose tener en cuenta que se vio obligado a generar un despliegue superior en actuaciones dentro del presente proceso, comparado con el provocado por las entidades demandadas, pues fue la parte demandante quien aportó el material probatorio necesario para que dicho proceso pudiese ser definido, así como asistió a todas las audiencias, presentó alegatos de conclusión, realizó las notificaciones necesarias para que comparecieran las AFP, soportando los tres años que tardó en definirse el proceso.

4. Alegatos de Conclusión

Tal como se anunció en precedencia, en la presente instancia no se presentaron alegatos de conclusión por las partes.

5. Problema jurídico

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico:

¿Las agencias en derecho fijadas en primera y segunda instancia, a favor de la parte demandante, se establecieron teniendo en cuenta los parámetros señalados por el Acuerdo PSAA16 –10554 de 2016?

6. Consideraciones

6.1 Las agencias en derecho en los procesos laborales

Frente a la tasación de las agencias en derecho, el doctrinante Azula Camacho¹ ha referido:

“Para determinar el monto de las agencias en derecho, el artículo 366 (inc. 4º) del Código General del Proceso recogió lo preceptuado por el inciso 3º del artículo 393 del de Procedimiento Civil, en el sentido de aplicar las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si las tarifas fijan un mínimo y un máximo, el juez debe considerar esos criterios, pero, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada y la cuantía del proceso.”

En cuanto a las tarifas a aplicar por concepto de agencias en derecho, el Código General del Proceso en sus artículos 361 y 366 señala que es el juez o magistrado que conoció el proceso en primera o única instancia quien debe fijar dichos emolumentos al momento de liquidar las costas procesales, y que, a pesar de ser discrecional, está limitado por las tarifas máximas y mínimas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura. Así, según el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, para fijar las agencias en derecho se debe tener en cuenta:

- a) El tipo de proceso, precisando en su artículo 5.1 que en los procesos declarativos que carezcan de cuantía las agencias en derechos se establecerán en primera instancia entre 1 y 10 S.M.M.L.V., y en segunda instancia entre 1 y 6 S.M.M.L.V.
- b) Clase de pretensión: dispone el artículo 3º de la norma en comento:

“ARTÍCULO 3º. Clases de límites. Cuando las agencias en derecho correspondan a procesos en los que se formularon pretensiones de índole pecuniario, o en los que en la determinación de la competencia se tuvo en cuenta la cuantía, las tarifas se establecen en porcentajes sobre el valor de aquellas o de ésta.

(...)

*PARÁGRAFO 3º. Cuando las tarifas correspondan a porcentajes, en procesos con pretensiones de índole pecuniario, la fijación de las agencias en derecho se hará mediante una ponderación inversa entre los límites mínimo y máximo y los valores pedidos. **Esto es, a mayor valor menor porcentaje, a menor valor mayor porcentaje, pero en todo caso atendiendo a los criterios del artículo anterior.**” (Negrilla por fuera del texto original)*

- c) Los criterios en particular de la actuación de la parte favorecida con la condena en costas, que permita valorar la labor jurídica desarrollada, estos últimos coinciden con los mencionados en el numeral 4º del artículo 366 del CGP, esto es, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado, la cuantía del proceso y demás circunstancias relacionadas con dicha actividad.

Asimismo, en su Tratado de Derecho Procesal, el profesor Hernán Fabio López Blanco² frente a las agencias en derecho ha preceptuado:

“Se ha destacado dentro del concepto de costas está incluido el de agencias en derecho, que constituye la cantidad que debe el juez ordenar para el favorecido con la condena en costas con el fin de resarcirle de los gastos que tuvo que afrontar para pagar los honorarios de un abogado o, si actuó en nombre propio, como contraprestación por el tiempo y esfuerzo dedicados a esta actividad.

(...)

Como en ocasiones las tarifas de los citados acuerdos tan solo señalan montos mínimos y máximos, en estas hipótesis la labor del juez es más amplia y podrá “sin que pueda exceder

el máximo de dichas tarifas” realizar el señalamiento de las agencias en derecho considerando la cuantía del proceso, su duración, la naturaleza y calidad de la gestión desarrollada y cualquier otra circunstancia especial que sirva para fijar dentro de esos límites el equitativo honorario profesional que le debe ser reintegrado a la parte.

La suma que el juez señale como agencias en derecho no tiene que estar orientada por la que la parte efectivamente canceló a su abogado, así se demuestre fehacientemente la cuantía de ese pago, de modo que para nada obliga al juez las bases contractuales señaladas en materia de honorarios profesionales, ya que éste, dentro de los parámetros referidos es el único llamado a realizar la fijación pertinente.

Sin embargo, no deben olvidar los jueces que las agencias en derecho no constituyen una graciosa concesión de ellos para con uno de los litigantes, sino que se trata de establecer las bases de la justa retribución para quien se vio obligado a demandar o a concurrir al proceso, no obstante que la razón estaba de su parte, de ahí que el equitativo pero severo criterio en esta materia será un factor importante para evitar infinidad de trámites inútiles que se surten sobre el supuesto de que se afrontará una mínima condena a pagar costas.

Y de manera especial reitero el llamado de atención a los funcionarios de segunda instancia y casación, quienes por el trámite correspondiente a tales etapas del proceso fijan sumas ciertamente irrisorias que sólo constituyen un acicate para abusar del empleo de esos recursos.” (Negrilla fuera de texto)

6.2 Caso concreto

Tal como fuera planteado en el problema jurídico, esta Colegiatura se centrará en determinar si el monto establecido por el despacho de conocimiento por concepto de agencias se ajusta a los parámetros trazados por el Acuerdo PSAA16 –10554 de 2016.

Para tal efecto, es menester recordar que las agencias en derecho constituyen la cantidad monetaria que se debe ordenar para el favorecido con la condena en costas, con el fin de resarcirle los gastos que tuvo que afrontar para pagar los honorarios de un abogado. En sub lite, lo pretendido por la parte actora se alcanzó en primera y segunda instancia, pues se declaró la ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y, como consecuencia de ello, la transferencia a Colpensiones de todo el capital acumulado, rendimientos financieros producidos, así como los gastos de administración comisiones, cuotas de garantía de pensión mínima y seguros previsionales cobrados a la parte actora, estos últimos con cargo a sus propias utilidades y debidamente indexados. Así como se ordenó a Colpensiones que estudiara el derecho pensional, una vez solicitado por la parte actora, teniendo en cuenta la ineficacia del traslado declarada.

En ese sentido, al tratarse de proceso declarativo, esto es, sin cuantía, las agencias en primera instancia debieron oscilar entre 1 y 10 salarios mínimos, de conformidad con el artículo 5º aludido en precedencia, por lo que para concretar el valor de las agencias se debieron analizar los criterios señalados en las normas

aplicables, tales como la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado, la naturaleza de las pretensiones y demás circunstancias relacionadas.

En el caso concreto la pretensión perseguida era de carácter declarativa *-no pecuniaria como tal-*, practicándose pruebas como el interrogatorio a la parte actora; además, la duración en primera instancia se extendió por más de 2 años, esto es, entre el 18 de febrero de 2019, fecha de presentación de la demanda, y el 28 de octubre de 2021, fecha en que se emitió sentencia a su favor, la cual fue apelada por las codemandadas y la demandante, emitiéndose sentencia por parte de esta Colegiatura el 18 de abril de 2022.

En el expediente digital se advierte que el profesional que representa los intereses de la actora procuró la comparecencia oportuna de las entidades que integran la parte pasiva de la litis, actuó en la audiencia concentrada y en todo el trámite procesal, subsanando la demanda y presentando memoriales que propendieron por el impulso del proceso, lo cual permitía establecer 4.5 salarios mínimos como agencias en derecho en primera instancia, de los cuales sólo debe sufragar Porvenir S.A. el 80%, esto es, \$3.600.000.

En consecuencia, para la Sala mayoritaria las agencias en derecho fijadas en primera instancia no se ajustan a derecho por lo que se debieron tasar en 4.5 SMLMV, pues el hecho de que el proceso carezca de cuantía en modo alguno implica pauperizar los honorarios del abogado, ni mucho menos castigar su labor por el solo hecho de acompañarse a los precedentes de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia o, disminuirse el porcentaje porque la tardanza del proceso se hubiera dado por causas externas, como la emergencia sanitaria y la implementación de la virtualidad, antes bien, al ser ajenas al apoderado de la parte, demuestra su diligencia.

En atención a lo hasta aquí dispuesto, se revocará para modificar la decisión de primera instancia, para en su lugar disponer que las agencias en derecho de primer grado corresponden a la suma de \$4.500.000 (4.5 SMLMV), de los cuales Porvenir S.A. debe reconocer el 80%, esto es, \$3.600.000.

Al haber prosperado el recurso no habrá condena en costas procesales de segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el **Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Primera de Decisión Laboral,**

RESUELVE:

Primero.- REVOCAR el auto proferido el 12 de agosto de por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, para en su lugar, disponer que las agencias en derecho de primer grado corresponden a la suma de \$4.500.000 (4.5 SMLMV), de los cuales Porvenir S.A. debe reconocer el 80%, esto es, \$3.600.000.

Segundo.- Sin costas en segunda instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La Magistrada ponente,

Con firma electrónica al final del documento
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN

La Magistrada y el Magistrado,

Con firma electrónica al final del documento
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA
SALVA VOTO

Con firma electrónica al final del documento
GERMAN DARIO GOEZ VINASCO

Firmado Por:

Ana Lucia Caicedo Calderon
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Laboral
Tribunal Superior De Pereira - Risaralda

Olga Lucia Hoyos Sepulveda
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 004 Laboral

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda
Firma Con Salvamento De Voto

German Dario Goetz Vinasco
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 003 Laboral
Tribunal Superior De Pereira - Risaralda

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d6d72bad0f1d083a2d74e7a0c3714b7d1b5ccc1ab5348a42d0fd6e4e34b23f51**

Documento generado en 16/03/2023 02:09:13 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>